



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR



Tesina

**EL EFECTO DIRECTO DE LAS
DIRECTIVAS DEL DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA**

Anna Franziska Rucker
DNI 94.301.338

Facultad de Ciencias Económicas
Licenciatura en Gerenciamiento Económico
Intercultural

Director: Lic. Claudio Blanchart

Tutora: Dra. Celina Peinado

Buenos Aires, Agosto 2012

Índice

1. Introducción.....	3
2. El Derecho de la Unión Europea como ordenamiento jurídico <i>sui generis</i> y autónomo	5
3. Las fuentes del Derecho de la Unión.....	8
3.1. Las fuentes originarias.....	8
3.2. Las fuentes derivadas.....	9
3.2.1. <i>Actos unilaterales</i>	10
3.2.1.1. Los actos típicos	10
3.2.1.2. Los actos atípicos	15
3.2.2. <i>Actos convencionales</i>	15
3.3. Las fuentes de Derecho subsidiario.....	16
4. El principio de la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno.....	20
5. El efecto directo de las normas del Derecho de la Unión.....	24
5.1. Aplicabilidad directa y efecto directo.....	25
5.2. El efecto directo en la normativa de la Unión.....	26
5.3. Alcance del efecto directo.....	30
5.4. Los diferentes supuestos del efecto directo. Vertical, vertical inverso, horizontal.....	31
6. El efecto directo en las Directivas	33
6.1. Condiciones que deben concurrir	33
6.2. Alcance de la noción de Estado según el TJUE.....	39
6.3. Alcance de la noción de particular según el TJUE.....	44
6.4. El efecto de exclusión.....	45
6.5. El efecto directo vertical inverso	47
6.6. El efecto directo horizontal.....	48
6.6.1. Argumentos en pro y en contra de la eficacia horizontal de las Directivas.....	51
6.6.2. Efectos indirectos o triangulares.....	56
7. La suavización de las deficiencias de la negación del efecto directo horizontal	59
7.1 Interpretación conforme a la Directiva del Derecho interno	59
7.2 Responsabilidad del Estado por daños causados a particulares por incumplimiento del Derecho de la Unión	63
8 Conclusión.....	66
9 Bibliografía	69

1. Introducción

La adhesión de los Estados miembros a la Unión Europea (y antes a las Comunidades Europeas) conlleva, con la correspondiente pérdida de soberanía en determinadas competencias de cada uno de ellos, el sometimiento de los mismos a los Tratados y al ordenamiento jurídico de la Unión. Por ello, el Derecho de la Unión coexiste con el interno, con parcelas de competencias cedidas a la Unión y materias reservadas por y para los Estados miembros, aun estando algunas de ellas inmersas en un proceso de armonización.

Ambos ordenamientos jurídicos tienen un destinatario en común: las personas físicas o jurídicas, o como los denomina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), hasta 2009 de la Comunidad Europea (TJCE): los administrados, los nacionales, los particulares, los justiciables.

Las relaciones entre ambos ordenamientos se someten a dos principios básicos: el principio de primacía del Derecho de la Unión y el principio de eficacia directa del mismo.

En el presente trabajo me ocuparé de analizar la evolución producida en el reconocimiento de la eficacia directa de las Directivas y su incidencia sobre la legislación interna de los Estados miembros, examinando especialmente el problema producido por la falta de transposición de una directiva por un Estado, su capacidad de crear derechos y obligaciones jurídicas para o contra el Estado y la posibilidad de que pueda producir efectos entre los ciudadanos.

El objetivo es comprobar el estado actual del citado principio y constatar las situaciones de discriminación e inseguridad jurídica que se generan como consecuencia del efecto directo limitado vertical de las Directivas aplicado por el TJUE respecto de las relaciones entre particulares o entre particulares y empresas públicas como resultado de la ampliación de la noción de Estado.

Mi posición que defiendo a lo largo de este trabajo es a favor del reconocimiento del efecto directo pleno de las Directivas y uno de los principales argumentos viene marcado, por las vías indirectas, que aunque resulte paradójica, el propio Tribunal de Justicia ha abierto y como analizaré, se aproximan, en cierta medida, al reconocimiento de la eficacia directa horizontal de la Directiva.

No efectuaré una investigación *ex novo*, sino que me basaré en estudios doctrinales previos y, en particular, en el análisis de la propia jurisprudencia del TJUE. Aunque el trabajo tiene por objeto las Directivas y su efecto directo, considero que no podrán analizarse y entenderse las sentencias del Tribunal de Justicia sin tener una visión más amplia, aunque general, de las características principales y diferencias de las fuentes del Derecho de la Unión. Por ello, en primer lugar, a modo de introducción, efectuaré un somero análisis del ordenamiento jurídico de la Unión, su sistema de fuentes, con especial interés en el Reglamento y en la Directiva de la Unión. A continuación, seguiré con el análisis del principio jurisprudencial de la primacía del Derecho de la Unión sobre los Derechos internos, para culminar con el análisis del principio de eficacia directa del Derecho de la Unión y, en particular, de las Directivas, desde un punto de vista doctrinal y, principalmente, jurisprudencial.

Luego efectuaré un análisis del efecto directo en las distintas relaciones jurídicas (vertical y horizontal), de la negativa del Tribunal de Justicia de la UE al reconocimiento expreso en el caso del efecto horizontal, de la reacción de la doctrina científica y de los argumentos en pro y en contra de dicho efecto.

A continuación explicaré los principios de interpretación del derecho interno conforme al Derecho de la UE y la responsabilidad del Estado miembro infractor por la aplicación incorrecta que entran en juego para paliar el incumplimiento, cuando no se reconoce el efecto directo de la directiva expresamente.

2. El Derecho de la Unión Europea como ordenamiento jurídico *sui generis* y autónomo

El derecho de la Unión Europea puede definirse, en una primera aproximación, como el conjunto de normas u ordenamiento jurídico orientado a la labor de la Unión, cuya función ha resultado primordial en el proceso de integración europea, ya que ni la Unión ni las Comunidades Europeas han dispuesto de los instrumentos de orden público que caracterizan a los Estados. Por tal motivo, el derecho por el que se rigen o se han creado es el único medio que les ha permitido desarrollar dicho proceso.¹

De conformidad con la jurisprudencia del TJUE y especialmente por las Sentencias *Van Gend en Loos*² y *Costa/ENEL*³, el Derecho de la Unión se caracteriza por ser un ordenamiento jurídico nuevo y diferente del Derecho internacional público y de los Derechos de los Estados: se aplica directamente, tiene su propio sistema de fuentes, órganos de producción normativa y procedimientos propios, y dispone de un control jurisdiccional autónomo.

En la Sentencia *Van Gend en Loos* el entonces TJCE puso de manifiesto que el objetivo del Tratado de las Comunidades Europeas era el de establecer un mercado común, lo que implicaba que dicho Tratado era algo más que un acuerdo con obligaciones recíprocas únicamente para los Estados contratantes, constituyendo la Comunidad un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, constituida no sólo por los Estados miembros sino también por sus ciudadanos y habiendo limitado aquéllos sus soberanía, aunque de forma restringida, a favor de la Comunidad. En la misma sentencia también situó al Derecho común “independiente de la legislación de

¹ PÉREZ TREMPES, P., “La Jurisdicción constitucional y la Integración Europea”, en SAIZ ARNAIZ A. [et al.]; colab., *Hacia una Corte de Justicia Latinoamericana*, 1ª ed., Amela, Valencia, 2009, pág. 84

² Sentencia del TJCE de 5 de febrero de 1963, *Van Gend en Loos*/Administración fiscal holandesa, asunto 26/62.

³ Sentencia del TJCE de 15 de julio de 1964, *Costa vs. E.N.E.L.*, asunto 6/64

los Estados miembros”, y en la sentencia *Internationale Handelsgesellschaft*⁴ extrajo importantes consecuencias de su autonomía rechazando “recurrir a reglas o nociones jurídicas de Derecho nacional para la apreciación de la validez de los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad”, ya que el Derecho de la Unión nace de una “fuente autónoma”. Además, las categorías y nociones del Derecho de la Unión no coincidirían necesariamente con las categorías y nociones del Derecho nacional.⁵

En la Sentencia *Costa/ENEL* el TJCE estableció que el Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE), a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, había establecido un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde el momento de su entrada en vigor, teniendo que ser observado por los órganos jurisdiccionales nacionales y constituyendo una institución de duración ilimitada, dotada de sus propios órganos, con personalidad y capacidad jurídica y de representación en el ámbito internacional, cuyos poderes efectivos provienen de una limitación de la soberanía de sus Estados miembros o de una transferencia de competencias por los mismos, generando un ordenamiento jurídico vinculante para sus ciudadanos y para ellos mismos.

El TJUE ha reiterado en varias ocasiones la concepción de la Comunidad y de la Unión Europea como una comunidad de Derecho, con un sistema jurídico autónomo,⁶ “cuyo respeto garantiza el TJUE de conformidad con la competencia

⁴ Sentencia del TJCE de 17 de diciembre de 1979, *Internationale Handelsgesellschaft*, asunto 11/70.

⁵ MANGAS MARTIN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, Editorial Tecnos, 6ª edición, Madrid, 2010, pág. 364.

⁶ Por ejemplo en la Sentencia del TJCE de 3 de septiembre de 2008, *Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo de la Unión Europea*, asuntos acumulados C-402/05-P y C-415/05-P, apartados 281 y 282: “A este respecto, es preciso recordar, con carácter preliminar, que la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho, ya que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado y este último ha establecido un sistema

exclusiva conferida por el artículo 220 del Tratado.” (actualmente sustituido en sustancia, por el artículo 19 del Tratado de la UE).⁷



completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a encomendar al Tribunal de Justicia el control de legalidad de los actos de las instituciones.”

⁷ Por ejemplo en la Sentencia del TJCE de 30 de mayo de 2006, Comisión/Irlanda, asunto C-459/03, apartado 123: “El Tribunal de Justicia ya ha recordado que un acuerdo internacional no puede menoscabar el orden de las competencias fijado por los Tratados y, por lo tanto, la autonomía del sistema jurídico comunitario cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 220 CE. Confirma esta competencia exclusiva del Tribunal de Justicia el artículo 292 CE, según el cual los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación del Tratado CE a un procedimiento de solución distinto de los previstos en él.”